

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

Señor:

**JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA VALLE  
(REPARTO)**

**REF: DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA**

**DEMANDANTES: GERARDO PEREIRA, GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN Y DANIEL PULGARIN PULGARIN.**

**DEMANDADOS: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL, LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL; - NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO ECOPETROL S.A., EMPRESA ENERGÍA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**

**HENRY ESCOBAR HOLGUIN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.353.565 de Tuluá (Valle), abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 61.005 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como mandatario judicial de **GERARDO PEREIRA (PADRE DEL OCCISO), GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN (HERMANOS DEL OCCISO); Y DANIEL PULGARIN PULGARIN (TIO DEL OCCISO)**, quienes obran en su propio nombre y representación, mediante el presente escrito nos permitimos presentar **DEMANDA DE ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA** en contra de: **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL; NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL; NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO ECOPETROL S.A. y EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**

**PARTES, APODERADOS O REPRESENTANTES:**

**DEMANDANTES: GERARDO PEREIRA (PADRE DEL OCCISO), GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN (HERMANOS DEL OCCISO); Y DANIEL PULGARIN PULGARIN (TIO DEL OCCISO).**

**DEMANDADOS: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL, LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL; - LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO ECOPETROL S.A., EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.** representados legalmente por los señores Ministros, Gerentes o quienes hagan sus veces.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO:** Representada por su Director General o quien haga sus veces.

**MINISTERIO PUBLICO:** Representado legalmente por el Señor Procurador Judicial competente o quien haga sus veces.

### **PRETENSIONES**

**PRIMERA:** Obrando en nombre y representación de mis poderdantes, solicito se declare que **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, - LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL S.A.), Y EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO EPSA S.A. E.S.P.** administrativamente deberán responder patrimonialmente por todos y cada uno de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los Señores poderdantes **GERARDO PEREIRA (PADRE DEL OCCISO), GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN (HERMANOS DEL OCCISO);** y **DANIEL PULGARIN PULGARIN (TIO DEL OCCISO),** como consecuencia del fallecimiento del Señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN (Q.E.P.D.),** según hechos por los cuales se produjo el deceso de este ocurrido día 10 de marzo de 2013, cuando miembros del grupo subversivo de las denominadas F.A.R.C-EP, en atentado terrorista efectuado el 16 de octubre de 2012 dinamitaron una torre de energía de propiedad de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA. S.A. E.S.P. y el poliducto ubicado en el municipio de San Pedro (V), que trasportaba combustible gasolina, volando el poliducto Cartago – Yumbo línea Medellín a la altura del punto PK 95+400, propiedad de la Empresa Colombiana de Petróleo “ECOPETROL” S.A.

**SEGUNDO:** Como consecuencia de la anterior declaración las entidades demandas paguen a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:

#### **1. PERJUICIOS MORALES**

a) Para el Señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN,** quien sufrió el grave accidente, hoy fallecido, en cabeza de sus herederos y familiares, o de su sucesión intestada, o a quienes representen sus derechos al momento del pago de la suma ordenada judicialmente, el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 s.m.l.m.v), o más, según las pautas jurisprudenciales, por la tristeza, profundo pesar y dolor físico que se le género por las lesiones físicas padecidas en todo su cuerpo en los hechos del día 16 de Octubre de 2012, y durante el tiempo que estuvo hospitalizado en agonía hasta el 10 de marzo de 2.014, día de su fallecimiento. A eso de las 5:55 p.m., aproximadamente, en el atentado terrorista ejecutado en el Municipio de San Pedro (Valle del Cauca), que le ocasiono quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo, situación que le hizo sufrir difíciles momentos, angustias, desespero personal y familiar, ya no gozaba de una vida normal por los dolores, gritos que padecía, quedando él y su familia en un estado de debilidad por el estado de salud extremadamente critico que presentaba,

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

circunstancia que le impidió **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, una vida normal ya que nunca pudo salir del estado postración desde que llegó al primer centro Hospitalario hasta que dejó de existir, como consecuencia de las graves lesiones recibidas producto del atentado terrorista.

Es bueno manifestar que el Honorable Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos ha considerado que, frente a los principios informadores del derecho a la reparación integral, la transmisibilidad del derecho a la reparación de los daños morales causados a la víctima directa, es procedente, por regla general. En efecto, debe entenderse que de conformidad con lo dicho, el derecho a la indemnización es de carácter patrimonial económico y por ende, la obligación indemnizatoria, se transmite a los herederos de la víctima, por tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial económico, que se concreta en la facultad de exigir del responsable, la indemnización correspondiente, toda vez que en el ordenamiento jurídico Colombiano no existe disposición de carácter legal expresa prohibitiva y por el contrario, la regla general, indica que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial transmisible y por ende los sucesores mortis causa, reciben la herencia con integro su contenido patrimonial y, ya se observó que el derecho de resarcimiento, o lo que es igual, la titularidad del crédito indemnizatorio, no se puede confundir con el derecho subjetivo de la personalidad vulnerada.

En cuanto a la responsabilidad **Mortis Causa** del perjuicio moral, el Honorable Consejo de Estado ha establecido el derecho a reclamarlo a los herederos:

*“... en lo relacionado con la transmisibilidad Mortis Causa de los derechos por daños morales ha sido punto discutido entre quienes sostienen que tratándose de un derecho personalísimo-inherente a la personalidad-, es intransmisible e incesible, por la consideración de que esa clase de categoría de derechos se encuentra íntimamente ligada a la existencia de su titular y sobreviniendo la muerte, no puede transmitirse a los herederos; también se sostiene, en apoyo de esa postura, que los perjuicios morales dada su naturaleza intrínseca que se fundamenta en el dolor, el padecimiento, la congoja o la tristeza padecidos por la víctima, no pueden ser susceptibles de transmisión como que el único legitimado para reclamarlo es la propia víctima o el directamente afectado, ya que resultaría “inmoral” aceptar la transmisión de este perjuicio, como que el dolor no puede ser susceptible de actos dispositivos que comparte la transmisibilidad del mismo, sin embargo, la jurisprudencia ha considerado que no existe en el ordenamiento jurídico Colombiano precepto prohibitivo que permita afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial, que desde luego puede ser ejercido bien directamente por el afectado o por los continuadores de su personalidad, sucesores Mortis Causa que en su condición de herederos representan al de cujus, o más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostenta el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento. Finalmente si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo particular, cuando se solicita el*

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

reconocimiento de esto por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia y la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió, como equivocadamente lo advirtió el Aquo, pues lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento a la persona que era titular del mismo y por ende legitimada para demandar. En conclusión, como la Señora GUZMAN DE OREJUELA, sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión. Nota de relatoría: Ver exp. 12009 del 10 de Septiembre 1998...”.

- b) Para **GERARDO PEREIRA**, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de padre del fallecido.
- c) Para **GERARDO PEREIRA PULGARIN**, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de hermano del fallecido.
- d) Para **WILMER PEREIRA PULGARIN**, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de hermano del fallecido.
- e) Para **MARISOL PEREIRA PULGARIN**, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de hermana del fallecido.
- f) Para **DANIEL PULGARIN PULGARIN**, doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de tío del fallecido.

El fallecimiento del Señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN (Q.E.P.D.)**, ocurrido el día 10 de marzo de 2013, ha causado grave perturbación emocional y desasosiego en la familia **PEREIRA PULGARIN**, su niñez, sus juegos, su pubertad, su compartir con sus padres y hermanos, su ayuda mutua y hoy ya no está ese hijo, hermano y sobrino, hecho que causa grave dolor, situación que genera la obligación de indemnizar el perjuicio moral causado pues como se demostrará en el transcurso del proceso, la responsabilidad administrativa asumida por **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL; LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. (ECOPETROL S.A.), Y EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO EPSA S.A. E.S.P.** ha causado perturbación psíquica, física, emocional y desasosiego en el grupo familiar, situación que genera llamamiento a indemnizar el perjuicio moral causado.

## **2. PERJUICIOS MATERIALES: DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO, DAÑO EMERGENTE FUTURO Y LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO.**

Las cifras solicitadas por concepto de perjuicios materiales serán determinables de acuerdo con las bases y las cuantías que se señalan en los hechos y pretensiones de la demanda, cuya liquidación deberá hacerse en concreto.

Los valores históricos deducidos deberán actualizarse.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

**El lucro cesante**, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL; LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. (ECOPETROL S.A.), Y EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO EPSA S.A. E.S.P., deberán cancelar al Señor **GERARDO PEREIRA**, padre del occiso, la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000=)**, la cual se liquidará en la proporción que ha determinado la jurisprudencia, correspondiente a la suma que **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, dejó de producir en razón de su deceso, habida cuenta la actividad laboral que en forma independiente realizaba para el momento del insuceso, como comerciante de material de río para construcción y otras labores agrícolas.

En igual forma, serán reconocidos en la estimación de los perjuicios las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones o por lo menos el aumento del 30% que por este concepto ha ordenado el Honorable Consejo de Estado.

Igualmente se aplicará la fórmula:

$$VP = S \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP: Valor Presente  
S: Suma que se busca actualizar

Índice Final: Índice de precios al consumidor a la fecha del incidente regulador.

Índice Inicial: Índice de precios al consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos períodos:

a) **Vencido o Consolidado:** Que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

Ra Renta mensual actualizada según la primera fórmula.  
i Interés puro o técnico del 6% mensual o 0.4867 mensual.  
N Periodo (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

b) **Futuro o anticipado:** Que se halla mediante la fórmula:

$$S = \frac{Ra (1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n}$$

S Suma buscada

Ra Renta actualizada

i Interés 6%

n Número de meses a indemnizar (supervivencia).

De acuerdo con los factores mencionados inicialmente; podría tasarse este perjuicio en la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000=) M/CTE.

### **3. PERJUCIOS FISIOLÓGICOS Y/O ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA**

**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL; LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. (ECOPETROL S.A.), EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO EPSA S.A. E.S.P.** deberá reconocerle al Señor **GERARDO PEREIRA**, padre del occiso, a sus hermanos **GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN**, y al Señor **DANIEL PULGARIN PULGARIN**, tío del occiso, la suma correspondiente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de **DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN**; ya que como consecuencia del deceso de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, se ha ocasionado un daño a la vida de relación familiar, pues justo hasta antes de los fatídicos hechos, dicho fallecido se reunía periódica y constantemente (fines de semana y fechas especiales) con su padre, hermanos, tío y demás familiares a compartir y festejar conmemoraciones e inclusive a compartir momentos difíciles que se llegaron a presentar; una vez que partió a hacer su convivencia de manera independiente nunca dejó de visitar y participar de las actividades que se programaban en su grupo familiar donde nació, se educó y se formó, razón por la cual cambiaron las condiciones esenciales de la vida y desempeño normal de la familia **PEREIRA PULGARIN**, al punto que hoy día no se pueden realizar las actividades que se hacían en compañía del fallecido **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, pues sencillamente este ya no se encuentra entre ellos.

Respeto a este perjuicio daño a la vida de relación; el Consejo de Estado puntualizó:

*“... puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que, como la advierte el profesor Felipe Navia Arroyo, únicamente permitirá considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física.*

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

*“Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4° del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que – al margen del perjuicio material que en sí misma implica – produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas”.*

*Este tipo de perjuicio hace referencia a una afectación de tal naturaleza que impida o vuelva más difícil la realización de ciertas actividades rutinarias o placenteras en la vida de una persona, pues la alta corporación en relación a este perjuicio, expreso:*

*“La Sala ha considerado que tratándose de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las víctimas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, daño extra patrimonial que ha sido denominado por la doctrina como perjuicio fisiológico, alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación y que consiste en la afectación extra patrimonial de la vida exterior de las personas. La Sala, en sentencia de 2000, consideró que el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran la vida de relación de las personas; igualmente se ha considerado que tampoco debe limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido también por las personas cercanas a ésta, como sus padres, cónyuge e hijos; ni debe restringirse a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues debe referirse sólo de la afectación sufrida por la persona en su relación con las demás ya que puede serlo con las cosas del mundo. La existencia de este perjuicio como la de los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida familiar y laboral...”* (Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de marzo 01 de 2006, Expediente No. 13887, Mag. Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

Señor Juez, de lo Contencioso Administrativo, obrando como apoderado judicial de mis poderdantes, solicito una indemnización para cada uno de los demandantes por concepto de **DAÑO A LA VIDA DE RELACION**, ya que se produjo el fallecimiento de **ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, no puede olvidarse que a sus familiares se le ha ocasionado gran daño por la frustración de haberles terminado abruptamente la

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

posibilidad de compartir momentos esenciales y placenteros que realizaban antes de su fallecimiento como lo dije anteriormente. Como se observa la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, es enfática en precisar que queda al arbitrio de los Jueces el reconocimiento de esta compensación, pero así mismo debe ser razonado el reconocimiento con fundamento en el principio de equidad, atendiendo desde luego las condiciones especiales de este grupo familiar (Ley 446 de 1998).

4. **INTERESES DE LEY:** Se debe a cada uno de los demandantes o a quien o quienes sus derechos representen al momento del pago, los que se generen a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia judicial y hasta su pago total efectivo.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, todo pago se imputará primero a intereses.

5. **CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA:** Las Entidades Demandadas darán cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con los artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A

## **HECHOS**

1. **ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, nació el día 17 de septiembre de 1.987 en Tuluá (Valle), en un hogar conformado por **GERARDO PEREIRA** (padre) y **ANGELICA PULGARIN PULGARIN** (madre ya fallecida) y cuatro hermanos más, de los cuales uno de ellos ya falleció.
2. El Señor **ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, convivió en unión libre con **YESSICA MARIA CORTES LEAL**, quien era su compañera permanente hacía más de diez (10) años, en dicha convivencia procrearon a la menor **ANGELICA MARIA PEREIRA CORTES**, y el occiso acogió como su hijo de crianza a **HAMILTON ANDRES CORTES**, y siempre convivió con sus hijos y su compañera bajo el mismo techo de manera continua y permanente, era la persona con la que compartía lo que se ganaba de manera independiente en su trabajo, respondía por la obligación y necesidades de su hogar. También le ayudaba a su padre **GERARDO PEREIRA**.
3. **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, siempre trabajó en forma independiente, se dedicaba a la extracción y comercio de material de río, arena, balastro y piedra para la construcción. También se dedicaba a trabajar en fincas como casero o mayordomo y realizaba labores agrícolas, actividades laborales que le reportaban un ingreso promedio mensual hasta el año 2012 de aproximadamente **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000=) m/cte.**
4. Durante su vida, **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, fue alegre, compresivo, responsable, siempre prodigaba amor y solidaridad a su familia, ya que visitaba continuamente a su padre y hermanos. Los fines de semana, compartían juegos de sala como parqués, dominó, rompecabezas, realizaban “paseos de olla” al río y siempre festejaba fechas especiales, le ayudaba económicamente a su papá Don **GERARDO PEREIRA**, a quien le aportaba la suma aproximada de

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

**TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000=) M/CTE** mensuales, para su sostenimiento ya que su padre no es pensionado, ni labora en ninguna actividad, pues pasa de sesenta años de edad.

5. El día 16 de Octubre de 2012, pasadas las 5:55 p.m. aproximadamente, se escucharon dos (2) detonaciones, con la primera de ellas, volaron una torre de energía, aproximadamente seis minutos después se escuchó la segunda detonación con la cual volaron el poliducto Cartago-Yumbo línea Medellín, a la altura del punto PK95+400. Se trató de un atentado terrorista, ocasionado por un grupo al margen de la ley.
6. El Alcalde de San Pedro (Valle), **ALVARO ANTONIO REBELLÓN TASCÓN**, expresó en respuesta a un derecho de petición, lo siguiente “En nuestro concepto los directos responsables de la tragedia ocurrida, fueron los grupos al margen de la ley, quienes con elementos detonantes volaron la torre de energía y el poliducto sin medir las consecuencias de sus actos y sin pensar que ponían en riesgo la vida y la integridad de toda una población...”.
7. Como consecuencia de las explosiones y la fractura o voladura del poliducto se derramaron aproximadamente 25.000 galones de gasolina, según informe de Ecopetrol S.A. a la Alcaldía de San Pedro (Valle), combustible que tomó el cauce de las aguas de la Quebrada La Artieta, por lo menos en dos kilómetros “aguas abajo”. Dicho combustible se incendió y explotó causando infinidad de daños materiales y ambientales, resultaron lesionadas 19 personas, tres de ellas con quemaduras y lesiones muy graves, siendo uno de ellos **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**.
8. El día de los hechos, 16 de Octubre de 2012, **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, siendo aproximadamente las 6:00 p.m. se encontraba con un grupo de amigos jugando fútbol en un sector muy cercano y contiguo a la Quebrada La Artieta del municipio de San Pedro (Valle), y fueron sorprendidos por el incendio que se originó en las aguas de la quebrada, incendio conformado por llamaradas de fuego o candela que alcanzaban más de 12 y 15 metros de altura, producido por la voladura con artefactos explosivos que el grupo al margen de la ley FARC, le hiciera al poliducto de Ecopetrol S.A., que trasportaba combustible gasolina entre los municipios de Cartago y Yumbo.
9. El Señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, sufre quemaduras impresionantes en todo su cuerpo. Dada su gravedad es trasladado de inmediato al Hospital San José de Buga (V), allí es atendido a las 19:30 p.m., y diagnostican quemaduras de 100% de su cuerpo, grado III y quemaduras grado II profundas, le realizan las atenciones ordenadas por sus médicos y como dicha institución no tiene UCI (unidad de cuidados intensivos) es remitido a la Ciudad de Cali, reportándose hora de salida a 20:40 p.m., según historia clínica No. 1116244498 de Fundación Hospital San José de Buga (V).

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

10. El señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, es recibido en el Hospital Universitario del Valle, el día 16 de Octubre de 2012, a las 23:28 p.m., como consta en la Historia No. 2187104 con ingreso No. 11584676, se encontraba en estado crítico recomendaron de inmediato su manejo por UCI y lavado exhaustivo para retirar gasolina y pasto, diagnostican quemaduras grado III, en todo su cuerpo incluido genitales, tal como se describe en gráfica hoja de resumen de Historia Clínica Pacientes Quemados.
11. En la Unidad de trauma del Hospital Universitario del Valle, dejan constancia en la Historia Clínica No. 2187104 que **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, se encuentra bajo sedación, con vendajes, conectado a ventilador mecánico, quemaduras Grado II y III, en cara, cuello, tórax, abdomen, genitales, extremidades, quemaduras graves, con gran extensión de superficie corporal, con muy mal pronóstico y baja probabilidad de sobrevivida, se decide dejarlo bajo medidas de aislamiento para mantenerlo de forma más adecuada, dado su estado crítico es remitido a una Clínica de mayor complejidad.
12. El Señor **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARÍN**, según historia clínica general es ubicado en Comfandi "Clínica Amiga", el día 17 de Octubre de 2012, hora 7:28 am, en la cama 23CAU212/3285474, respaldado por la aseguradora Consorcio SAYP2011, presentaba en su examen físico signos de dificultad respiratoria severo, estado de conciencia no aplica, deshidratación grave y estado general malo. Paciente que ingresa con quemaduras múltiples y quemaduras severas del 93% SC grado III – IV máximo grado, en muy malas condiciones generales, deshidratación severa por pérdida de la barrera (piel), con una lesión renal aguda, su pronóstico era reservado con alta probabilidad de muerte por gravedad y extensión de quemaduras, paciente agónico hace asistolia y fallece a las 9:30 a.m. del día 10 de Marzo de 2013.
13. Durante el tiempo de 4 meses y 23 días que permaneció hospitalizado **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, le realizaron **ochenta y seis 86 intervenciones quirúrgicas** que demuestran la gravedad de su estado de salud. Todo lo que le realizaron durante el tiempo que permaneció hospitalizado en la Clínica Amiga, está consignado en la Historia Clínica referida.
14. Ante los lamentables hechos, se inició por parte de la Fiscalía Sexta Especializada de Buga Valle, investigación penal radicada con el SPOA No. 16520121969, por los hechos del atentado terrorista ocurridos el 16 de octubre de 2012. (Se anexa constancia).
15. Las graves lesiones y posterior deceso del joven **ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, fueron causa directa del evento catastrófico y de la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional asumida por parte de las entidades demandadas, entidades que en cumplimiento de un deber Constitucional y legal de proteger a la comunidad en general exponen a los administrados a un riesgo excepcional que no están en la obligación de soportar al resultar afectados con ocasión de un ataque de un grupo subversivo a la infraestructura del Estado y a miembros del Ejército

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

Nacional, como en el sub judice aconteció con la voladura de una Torre de Energía y del Poliducto y el posterior incendio generado por el combustible de gasolina realizado por los terrorista momentos en los cuales hacia presencia en el lugar de los hechos la fuerza pública, siendo por ende lógico indicar que **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL – LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL; LA NACION -MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A. y EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**, deberán asumir la Responsabilidad Objetiva que les corresponde por Riesgo Excepcional.

16. Es incuestionable que frente a la realidad que vive nuestro país desde hace varios años, las autoridades encargadas de proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra y bienes no tomaron las medidas de seguridad y vigilancia suficientes para evitar que actos como el que hoy nos enmarca, se pudieran evitar, pues no se conocen medidas especiales de protección para la comunidad aledaña a la zona del atentado, las cuales debieron ser permanentes por existir allí una Torre de Energía Eléctrica y un Poliducto para el transporte de combustible.
17. Señor Juez, el deceso del joven **ANDRÉS MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, fue ocasionado por un riesgo excepcional al que fueron expuestos los demandados por parte de **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL – LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL – LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A. y EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**, como consecuencia del atentado terrorista perpetrado a la infraestructura del Estado y a su fuerza Pública, pues de vieja data, la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo ha manifestado que cuando estamos frente a daños causados por atentados terroristas, el régimen de responsabilidad es el del riesgo excepcional, el cual opera en los eventos en que el daño se produce como consecuencia de la realización de un riesgo creado de manera lícita por el Estado.
18. Es evidente que la presencia de la infraestructura del Estado, miembros de la Fuerza Pública, los cuales se encontraban en el sitio de los hechos en desarrollo de una operación, causó un riesgo, toda vez que con la realidad que vive nuestro país los agentes del orden han sido declarados objetivo militar por parte de miembros de grupos al margen de la ley, por consiguiente aunque la actuación de los uniformados haya sido lícita y justificada, la responsabilidad del Estado recae no sobre el carácter normal o anormal del servicio, sino del daño sufrido como consecuencia del riesgo creado para los ciudadanos durante la ejecución de una operación y por la existencia de la infraestructura energética del estado en el sitio del atentado terrorista.

El mero hecho de existir en el lugar de los hechos, una torre de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA S.A. E.S.P, y un poliducto, propiedad de Empresa Colombiana de Petróleo ECOPETROL S.A., por donde circula gasolina, generó también un riesgo para los transeúntes y vecinos de la zona semirural del Municipio de San Pedro (Valle).

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

19. Teniendo en cuenta los hechos generadores de responsabilidad, la grave acción y omisión de las entidades demandadas; los daños y perjuicios causados; la calidad de los demandantes, se concluye la responsabilidad del Estado y por consiguiente la relación de causalidad por lo tanto **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL; LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL; - LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO ECOPETROL S.A., EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**; deberán asumir la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional.
20. En virtud, que hasta la fecha no han sido resarcidos los perjuicios ocasionados al grupo familiar del señor **GERARDO PEREIRA**, y el resto de los demandantes, el día 01 de Diciembre de 2.014, se agotó audiencia de conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad llevada a cabo ante la Procuraduría 60 Judicial I, para asuntos administrativos de Cali (V), declarándose por este Despacho fallida la citada conciliación. El día 05 de Diciembre de 2.014, la misma entidad expide constancia de conciliación prejudicial o extrajudicial y declara agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 1285 de 2009 en concordancia con lo establecido en el artículo 37 de la ley 640 de 2.001.
21. Recibí poder para representar judicialmente a cada uno de los aquí demandantes, mediante la formulación de la respectiva ACCION DE REPARACION DIRECTA, para obtener la declaratoria judicial por medio de la autoridad judicial competente, de la correspondiente indemnización de perjuicios materiales y morales que por Ley les corresponde a mis mandantes, tomando en cuenta que hasta la fecha, ninguna de las Entidades Demandadas se ha dignado proponer y mucho menos realizar un pago de tan evidentes perjuicios causados al grupo **familiar PEREIRA PULGARIN**.
22. En la presente reclamación judicial concurren los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, el daño y el nexo causal entre los dos anteriores, además que la conducta omisiva resulta imputable a la autoridad pública y la valoración de dicha conducta conlleva necesariamente a concluir y a afirmar que ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar y mucho menos que los demandantes tenían el deber jurídico de afrontar.

#### **FUNDAMENTO JURIDICOS Y ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LA PARTE DEMANDANTE**

Artículo 1, 2, 5, 6, 11, 85, 90, 93 y 216 de la Constitución Nacional; Ley 599 de 2000; Código Nacional de Policía; Código Penal Militar; Ley 62 de 1993; Ley 180 de 1995; Decreto 1512 de 2000; Decreto 1798 de 2000; Decreto 1355 de 1970 en sus artículos 1 al 5, 29, 30, 31, 32, 35, 49 y 56; Artículo 18 del Decreto 522 de 1971; Decreto Ley 2137 de 1983 en sus artículos 1 al 9, 26, 27 y 28; Ley 446 de 1998; Artículos 86, 131, 1613 al 1617 del Código Civil; Artículo 4 y 8 de la Ley 153 de 1887; Decreto 10 de 1989 y

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

demás normas pertinentes aplicables al caso en concreto.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar *que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”*.

### **DE LOS REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD**

El Consejo de Estado en reiteradas oportunidades se ha pronunciado sobre la obligación resarcitoria que surge para el Estado en el evento de los daños causados con ocasión de las acciones violentas de las que han sido objeto instituciones públicas o funcionarios representativos de las mismas.

La Alta Corporación ha indicado que además de los deberes constitucionales fundamentales a cargo de gobernados y gobernantes sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho, en el que imperan la Constitución, las leyes, el respeto y obediencia a las autoridades (arts. 4 y 6), el deber correlativo de las autoridades de protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, y la garantía en relación con el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 2), tratándose de estos eventos hay unas condiciones *sui generis* que revisten características particulares para deprecar su deber resarcitorio.

El historial procesal y probatorio que en éste litigio se recaudará, permitirán encausar con muchísima claridad la responsabilidad de las Entidades Públicas Demandadas bajo la tesis objetiva; según circunstancias que relatáremos a continuación y si se quiere adicionalmente bajo la tesis subjetiva, pues ha concurrido en este hecho una evidente falla en el servicio.

En el tópico de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación relacionados con los eventos de actos violentos contra lo que implique representación estatal. Se ha acudido al del riesgo excepcional<sup>1</sup> cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo, cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada<sup>2</sup> cuando la irregularidad u omisión administrativa produjo el daño.

### **DEL RÉGIMEN OBJETIVO.**

La disposición contenida en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Nacional impone al

---

<sup>1</sup> Sección Tercera, sentencia del 23 de septiembre de 1994. Consejero Ponente Dr. Julio César Uribe Acosta.

<sup>2</sup> Ver, entre otras, sentencia de noviembre 6 de 1998 de la sección tercera, con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

Estado que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades; y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acordes con las circunstancias.

El pensamiento jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado ha precisado que en los casos como el que nos ocupa, la responsabilidad surge del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. A pesar que la actuación de los miembros de la institución castrense resulta legítima, ajustada al orden jurídico, no se requiere la existencia de una irregularidad para poder derivar la responsabilidad estatal.

Rememórese que lo “esencial del cambio introducido por el artículo 90 de la Constitución radica entonces en que ahora el fundamento de la responsabilidad no es la calificación de la conducta de la administración, sino la calificación del daño que ella causa. No se trata de saber si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico” es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar.

Obviamente, el nuevo fundamento de la responsabilidad estatal conlleva a su vez que no todo daño deba ser reparado, sino sólo aquel que reviste la connotación de antijurídico, es decir, no se repara el daño justificado, esto es aquel que quien lo padece tenga la obligación de soportar. Además, como en todos los casos de responsabilidad, debe tratarse de un daño que tenga un vínculo causal con la actividad de un ente público”<sup>3</sup>.

Pues bien, la aplicación del régimen del Riesgo excepcional sirve para deprecar la responsabilidad del Estado con fundamento en los daños ocasionados como consecuencia de un riesgo de naturaleza excepcional al que se ven sometidos los administrados, es ésta la situación que se presenta, por ejemplo, cuando son atacadas instalaciones o personas que deben ser protegidas por las autoridades de manera especial, o inmuebles donde tienen sede dependencias u organismos del Estado, que pueden ser considerados objetivos militares por parte de la subversión o de otros grupos al margen de la ley, de manera que su sola existencia puede poner en situación especial de riesgo a quienes se encuentran en los alrededores, por ser habitantes del sector donde se produce el atentado o por encontrarse fortuitamente en dicho lugar, quienes resultan sometidos a un sacrificio mayor al que corren los demás ciudadanos, no obstante que la presencia del Estado, por medio de oficinas, cuarteles, inspecciones, etc., o la acción de determinadas autoridades, se hace necesaria en beneficio de todos.

La Sala recientemente sostuvo, sobre la responsabilidad del Estado, por riesgo excepcional, en un caso similar al que ocupa su atención, lo siguiente:

---

<sup>3</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-43 de enero 27 de 2004. Mag. Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

Como ya lo refirió la Sala, este otro elemento de la responsabilidad, se encuentra debidamente probado en el proceso, toda vez que con las pruebas atrás relacionadas, se advierte que la Administración, expuso a la víctima a experimentar un riesgo anormal y grave que excede la igualdad frente a las cargas públicas, a cuya consecuencia se produjo el fallecimiento de la víctima"<sup>4</sup>.

Así mismo, la Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos ha puntualizado:

“Las medidas que el Decreto contempla a favor de las víctimas del terrorismo se justifican política y jurídicamente, bajo la teoría que admite la responsabilidad estatal sin culpa, en cuanto el daño proviene de un riesgo de naturaleza excepcional y anormal creado por la administración, como ocurre en la situación que nos ocupa, el cual es generado, con motivo del desarrollo de las actividades y misiones que el Estado debe asumir, para combatir la violencia y el terrorismo de la subversión guerrillera y de narcotráfico”<sup>5</sup>.

Recientemente, la Alta Corporación Constitucional en un juicioso estudio, precisó:

**“...5. Los Estados no pueden hacer responsables a las víctimas de sus omisiones**

El primero entre los treinta y ocho Principios que conforman la directriz de apoyo a los Estados, para la adopción de medidas eficaces de lucha contra la impunidad, elaborada de conformidad con la actualización ordenada por la Resolución 2004/72<sup>6</sup>, expedida por la Comisión de Derechos Humanos establece:

*“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitarla repetición de dichas violaciones”.*

Señala el Principio Diecinueve de la directriz a que se hace mención i) que los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y *“adoptarán medidas apropiadas respecto de los autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente”* y ii) que, sin perjuicio de la responsabilidad

---

<sup>4</sup> Sentencia de diciembre 13 de 2004, CP. Dr. Germán Rodríguez Vilamizar.

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-797-93 de Mayo 20 de 1993.

<sup>6</sup> La Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General designar un experto independiente que actualizara el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i) conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en cumplimiento de la Resolución 2003/72 -Luis Jonet 1997- y iii) que recogiera las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a fe profesora Diane Orentlicher y presentado como Add. 1 conjuntamente con el informe WCM.4/2005/102.

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

estatal en la materia, se adoptarán medidas complementarias para garantizar la participación de las víctimas y de toda persona u organización no gubernamental “interesada (...) *como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados, cuyo derecho penal contemple esos procedimientos*”.

Los Principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto “no existan recursos eficaces contra esa infracción” y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de *“las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación”* -Principios 22 y 23-.

En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir *“medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”* sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración -artículo 2º. CP. Principio 34-.

Siendo así, ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de emprender la investigación que demanda la ocurrencia de hechos criminales, dentro del marco del conflicto armado -desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que los autores de la violación sean procesados, juzgados y condenados-, la Red de Solidaridad Social no puede, de contera, condicionar la reparación a la expedición de una certificación -sobre los *“móviles ideológicos y políticos”*- que solo podrían haber expedido las autoridades judiciales, una vez culminado el trancado enjuiciamiento.

Lo anterior, toda vez que la exigencia de requisitos que las víctimas no pueden cumplir y que solo el Estado en cuyo territorio ocurren las vulneraciones debe asumir, para condicionar el acceso a los programas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción, vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y hace imperativa la intervención del juez constitucional para su restablecimiento...”<sup>7</sup>.

## **DEL REGIMEN SUBJETIVO**

"Se debe agregar que además de constituir la falla del servicio un elemento de imputación suficiente para deducir la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de los daños causados por atentados terroristas, en este campo adquiere relevancia especial la aplicación de la denominada teoría de la relatividad de la falla cuyo propósito es situar las obligaciones estatales dentro de las concretas

---

<sup>7</sup> CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-188/07. Expediente T-t 178911. Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

circunstancias en que se reclama un cumplimiento, para lo cual el Juez debe atender al grado de dificultad que significaba la prestación del servicio así como los medios (financieros, técnicos, humanos, poderes jurídicos, etc.) que disponía para atender su deber legal y evitar el perjuicio”<sup>8</sup>.

Bajo dicha óptica, se deduce que el tema de la prueba de la conducta bajo el título jurídico de falla del servicio se enfoca en la acreditación de la existencia de un deber para la Administración en las circunstancias concretas debatidas y en la desatención de ese deber, con motivo de una conducta de acción o de omisión del demandado.

Si bien es cierto el atentado terrorista tiene la particularidad de la sorpresa y de ocasionar una gran tragedia, en ocasiones ese factor sorpresa no tiene la equivalencia de imprevisibilidad. De ahí, para el caso que nos ocupa, existen determinadas circunstancias que desnudan la negligencia y conductas omisivas de las entidades demandadas.

Lo primero que hay advertir es que, en estos eventos, estamos siempre ante el hecho de un tercero, que, sin embargo, dadas las circunstancias especiales en que suceden, puede no ser ajeno a la acción u omisión del Estado, lo que permite atribuir a éste responsabilidad patrimonial.

La imputabilidad resulta del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce -sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso; son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio.

En otros casos, la imputabilidad puede resultar, como se explicó en puntos precedentes, de la creación, por parte del Estado, de un riesgo que se concreta en el atentado, causando daño a un particular.

Justamente nuestra Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo en un caso similar en sentencia del 29 de octubre de 2012. Radicado 1993-08632-01(18472). Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, refirió:

*“Para que pueda atribuirse responsabilidad al Estado bajo este título de imputación por los daños derivados de acciones violentas cometidas por terceros, es necesario que el acto no tenga un carácter indiscriminado y que haya sido perpetrado por grupos armados al margen de la ley en el marco del conflicto armado interno, contra un bien claramente identificable como Estado o un personaje representativo de la cúpula estatal, y del cual se derive un riesgo cierto para la población civil en consideración a las características de seguridad de la zona en que se ejecuta el ataque. En el caso bajo examen está probado que el*

---

<sup>8</sup> RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DEL ESTADO: Mar Eduardo Hernández Enríquez. Editorial Ediciones Nueva Jurídica. Edición 2007. Pág. 561

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

atentado terrorista no tenía un carácter indiscriminado, sino que estaba dirigido específicamente contra un bien claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno. (...) está probado que el daño surgió de la materialización de un riesgo excepcional. En efecto, dada la situación de conflicto armado, la cercanía a las instalaciones e infraestructura para el transporte de combustible generaba riesgos para la seguridad de las personas y sus bienes. Es de público conocimiento que, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la guerrilla estaba empeñada en atacar contra la infraestructura energética y petrolera del país. Las voladuras de torres de energía y los atentados contra los oleoductos eran hechos que se repetían con frecuencia: a lo largo y ancho del territorio nacional. (...). En el caso de los habitantes del municipio de Albán (Cundinamarca) el riesgo revestía un carácter cierto (...) la cercanía al propanoducto de propiedad de Ecopetrol puso a los habitantes y trabajadores de la vereda El Entable del municipio de Albán (Cundinamarca), en general, y a la sociedad fierro Ávila y Cía, S. en C, en particular, en una situación de riesgo excepcional.

**DAÑOS DERIVADOS DE ATAQUES ARMADOS PERPETRADOS POR GRUPOS GUERRILLEROS CONTRA BIENES E INSTALACIONES DEL ESTADO - Ataque guerrillero a oleoducto en el municipio de Albán Cundinamarca / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Configuración a título de riesgo excepcional.**

A pesar de que no se configura en este caso una falla del servicio, corresponde a Ecopetrol la reparación de los daños sufridos por la sociedad Fierro y Ávila y Cía., S. en C. con ocasión de atentado dinamitero perpetrado por la guerrilla de las FARC el 17 de marzo de 1991 en la vereda El Entable del municipio de Albán (Cundinamarca). Ello en razón a que el daño reviste el carácter de antijurídico y es imputable jurídicamente a la administración porque estuvo dirigido contra un objeto claramente identificable como Estado, en el marco del conflicto armado interno y supuso la materialización de un riesgo de naturaleza excepcional, creada conscientemente por Ecopetrol para el desarrollo de su objeto social.

NOTA DE RELATORIA: Con aclaración de voto de la doctora Stella Conto Díaz del Castillo”.

#### **OPORTUNIDAD DE LA ACCION:**

Con fundamento en el artículo 136 numeral 8 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, nos encontramos dentro del término de ley para instaurar la presente **ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA**, tomando en cuenta que el fallecimiento del joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN** aconteció el día diez (10) de marzo de 2013 y que este fallecimiento fue consecuencia directa debido a las múltiples y graves lesiones por el recibidas producto de un atentado terrorista dirigido a la infraestructura energética y petrolera propiedad del Estado y a su fuerza publica que allí se encontraba, tal como consta en las pruebas documentales aportadas, tales como historias clínicas de los centros hospitalarios donde estuvo y donde falleció, como también se desprende del respectivo Registro Civil de Defunción, además de las

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

pruebas testimoniales y de inspección judicial que se practicarán en el curso del proceso; a pesar que los hechos en que se perpetró dicho atentado terrorista, ocurrió el día 16 de octubre de 2012.

Para los demandantes, lo que se pretende es la indemnización de los perjuicios ocasionados por el Estado con ocasión del fallecimiento del joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, el cual ocurrió el día 10 de marzo de 2013; así los hechos que le ocasionaron las terribles quemaduras y lesiones que lo llevaron a su muerte hayan sucedido el día 16 de octubre de 2012, sencillamente porque es a partir del fallecimiento de su ser querido, que se consolidan concretamente los perjuicios materiales y morales, no por las lesiones recibidas, si no por su deceso.

Además, el joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, quedó en estado “agónico” después de recibir las quemaduras producto del atentado terrorista el día 16 de octubre de 2012, al punto que todos los médicos que lo atendieron, tal como consta en las respectivas Historias Clínicas aportadas al proceso como prueba documental, fueron supremamente claros: **LA SUPERVIVENCIA DEL LESIONADO ERA MINIMA**, es decir, que prácticamente sus familiares quedaron esperando la ocurrencia bien fuera de un milagro o de lo más viable: un posterior desenlace fatal de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, el cual no se sabía cuando iba a ocurrir pero que se tenía conocimiento de su ocurrencia en cualquier momento, como efectivamente aconteció el día 10 de Marzo de 2013, fecha a partir de la cual se iniciaría el término legal de caducidad de los dos (2) años de plazo para el inicio de la correspondiente acción indemnizatoria.

### **MANIFESTACION BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**

De conformidad con el literal d) del Decreto 2511 de 1998 me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que no he presentado demanda de Acción Indemnizatoria alguna, después de la petición de conciliación prejudicial; con base en los mismos hechos.

### **CUANTIA**

La estimación de la cuantía para efectos de determinar la competencia en el conocimiento de la presente acción, la estimo tomando en cuenta la pretensión mayor que está en la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000)**.

### **PRUEBAS**

Téngase como pruebas las siguientes:

#### **1. PRUEBAS DOCUMENTALES:**

- a) **Partida de matrimonio de GERARDO PEREIRA y ANGELICA PULGARIN PULGARIN**, expedido por la Parroquia del corregimiento La Marina Tuluá (V), padre y madre del occiso, respectivamente, en documento original.

*Calle 24 No. 25 - 17*

*Teléfono 2257676 Cel. 3156587856*

*Tuluá - Valle*

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

- b) **Registro civil de nacimiento** del joven fallecido **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, expedido por la Notaria Segunda de Tuluá, en copia autentica.
  - c) Acta de **registro civil de defunción** del Señor. **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, fallecimiento ocurrido el 10 de Marzo de 2013, expedida por la Notaría Octava de Cali (V), en copia autentica.
  - d) **Registro Civil de nacimiento** de **MARISOL PEREIRA PULGARIN**, expedido por la Notaria Segunda de Tuluá (V), en copia autentica.
  - e) **Registro Civil de nacimiento** de **GERARDO PEREIRA PULGARIN**, expedido por la Notaria de Segunda de Tuluá (V), en copia autentica.
  - f) **Registro Civil de nacimiento** de **WILMER PEREIRA PULGARIN**, expedido por la Notaria Segunda de Tuluá (V), en copia autentica.
  - g) **Registro Civil de nacimiento** de **DANIEL PEREIRA PULGARIN**, expedido por la Notaria Primera de Tuluá (V), en copia autentica.
  - h) **Historia Clínica** del Hospital San José de Buga (V) de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, aportada en copia simple.
  - i) **Historia Clínica** el Hospital Departamental Evaristo García de Cali (V) de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, aportada en copia simple.
  - j) **Historia Clínica** de la Entidad Hospitalaria Comfandi Clínica Amiga de Cali (V) de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, aportada en copia simple.
  - k) **Derecho de Petición** solicitado por el señor **GERARDO PEREIRA** y aportado el documento en copia simple, con firma y sello de recibido, suscrito por el demandante y padre del fallecido en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido al Alcalde del Municipio de San Pedro, Valle.
  - l) **Repuesta a Derecho de Petición**, suscrita por el Sr. **ALVARO ANTONIO REBELLON TASCÓN**, Alcalde de San Pedro (Valle), dirigida al Señor **GERARDO PEREIRA**, padre del occiso, de fecha Abril 28 de 2.013, aportado en documento original.
- Por tratarse de un documento publico original, este goza de la consecuente presunción de legalidad, tal como lo determina el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
- m) **Derecho de Petición** efectuado por el señor **GERARDO PEREIRA**, padre del fallecido en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro, Valle, aportado en documento en copia simple.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

- n) **Respuesta al Derecho de Petición** formulado al Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Valle, suscrito por **JORGE ENRIQUE PAREDES ALVARADO**, Capitán de dicha Institución, dirigido al Señor **GERARDO PEREIRA**, padre del occiso, de fecha Diciembre 02 de 2.013, en documento original.
- o) **Derecho de Petición** del señor **GERARDO PEREIRA**, padre del fallecido en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido al Batallón Palacé de Buga, Valle, con firma y sello original de recibido.
- p) **Respuesta a Derecho de Petición** No. 5437 MDN-CGFM-CE-DIV03-BR03-BAPAL-EJEC-CJIM del Batallón de Artillería No. 3 "BATALLA PALACÉ", dirigido al Señor **GERARDO PEREIRA**, en documento original.

Por tratarse de un documento publico original, este goza de la consecuente presunción de legalidad, tal como lo determina el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

- q) **Derecho de Petición** del señor **GERARDO PEREIRA**, padre del fallecido en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido al Comando de la Policía de San Pedro, Valle, con firma original de recibido, del día 12 de Septiembre de 2.014.

Se deja constancia que la respuesta a esta solicitud hasta la fecha de presentación de esta demanda de Acción de Reparación Directa, no se ha recibido respuesta alguna.

- r) **Derecho de Petición** del señor **GERARDO PEREIRA**, padre del fallecido en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C., con sello adhesivo original de recibido.
- s) **Respuesta a Derecho de Petición**, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C. NC 0347952014 Radicación 56744-2014, en documento original.

Por tratarse de un documento publico original, este goza de la consecuente presunción de legalidad, tal como lo determina el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

- t) **Constancia de la Fiscalía Sexta Especializada General de La Nación**, donde consta que se adelanta diligencia en estado activo, etapa de indagación, bajo NUNC 761116000165201201969 por el delito de terrorismo, víctima del siniestro se reporta al joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, aportado en documento original.

Por tratarse de un documento publico original, este goza de la consecuente presunción de legalidad, tal como lo determina el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

- u) **Censo consolidado de la emergencia** del día 16 de Octubre de 2.012 en el municipio de San Pedro (V)., expedido por la Personería Municipal de San Pedro (V), y aportado en documento copia, con fecha de elaboración Octubre 18 de 2.012
- v) **Página 12 y 13 del Periódico Extra** edición del día jueves 18 de octubre de 2.012, aportado en documento original.
- w) **(6) Fotografías** del lugar de los hechos donde ocurrió el atentado terrorista, aportadas en documento original.
- x) **Fotocopias simples** de las cédulas de ciudadanía de **GERARDO PEREIRA, MARISOL PEREIRA PULGARIN, GERARDO PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN Y DANIEL PULGARIN PULGARIN.**

### **SOLICITUD DE PRUEBAS DOCUMENTALES**

Le solicito respetuosamente al Honorable Juez Administrativo del Circuito de Buga (V), oficie a las siguientes entidades:

1. Al Señor **Comandante del Batallón Palacé de Buga (V)**, ya que el Derecho de Petición, solicitado por el Señor **GERARDO PEREIRA**, demandante y padre del occiso, dirigido a esa Institución con fecha de recibido 13 de Septiembre de 2.014, no contestaron exactamente lo preguntado; para que conteste lo siguiente:

1.1 Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

1.2 A quien, quienes se les responsabiliza o atribuye la realización del atentado terrorista cuya tragedia ocasionó la voladura del poliducto Cartago – Yumbo, línea Medellín a la altura del punto PK95+400.

1.3 El Ejército Nacional del Batallón Palacé de Buga (V), efectúa o efectuaba vigilancia permanente a las torres de energía y el poliducto que pasa por el territorio del municipio de San Pedro (V).

1.4 Para esa época se llegaron a presentar amenazas o exigencias a las autoridades o la población civil por parte de algún grupo al margen de la ley.

1.5 Que daños se presentaron: a) a las personas y quienes resultaron afectados; b) cuales fueron los daños materiales; c) cuales fueron los daños ambientales.

1.6 Explicar de manera detallada si aproximadamente dos (2) meses antes de la fecha del 16 de octubre de 2.012, se presentó la voladura de una torre de energía a un kilómetro del sitio donde ocurrió la tragedia ya reseñada; o si se han presentado atentados terroristas por grupos al margen de la ley en el área rural del municipio de San Pedro (V).

1.7 El municipio de San Pedro (V), se encuentra dentro de jurisdicción donde el Ejército Nacional Batallón Palacé de Buga (V), debe prestar vigilancia y protección a su área rural y a la infraestructura del país.

*Calle 24 No. 25 - 17      Teléfono 2257676    Cel. 3156587856      Tulúa - Valle*

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

2. Que ordene a la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, COMANDANTE DE LA TERCERA BRIGADA**, remita al Juzgado Administrativo del Circuito de Buga (V), copia autentica de los documentos de la investigación que adelantó con motivo del atentado terrorista ocurrido el día 16 de Octubre de 2.012, en el área rural del municipio de San Pedro (V). en caso de no ser viable o reservado lo anterior, que certifique todo lo ocurrido en atentado terrorista el día 16 de Octubre de 2.012 en el municipio de San Pedro (V).

**REMISION AL PROCESO DE COPIA AUTENTICA DE PRUEBA DOCUMENTAL:**

Solicito se ordene con destino al proceso y a mi costa, la remisión de **COPIA AUTENTICA** de las historias clínicas del joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, las cuales se aportaron en copia simple en la demanda; así:

1. **Historia Clínica** de la Entidad Estatal Hospital San José de Buga (V), del joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, quien en vida identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.116.244.498, aportada en copia simple según consta en el literal “h” de las pruebas documentales.
2. **Historia Clínica** de la Entidad Estatal Hospital Departamental Evaristo García de Cali (V) de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.116.244.498, aportada en copia simple literal “i” de las pruebas documentales.
3. **Historia Clínica** de la Entidad Privada Hospitalaria Comfandi Clínica Amiga de Cali (V) de **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.116.244.498, aportada en copia simple literal “j” de las pruebas documentales.

**RATIFICACION DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS APORTADOS COMO PRUEBA:**

Con el propósito que se cumpla el requisito de autenticidad determinado en el artículo 252 del C.P.C., me permito solicitar que la respectiva Entidad Pública o de carácter privado, ratifique el contenido del correspondiente documento aportado como prueba documental, bien sea que quien funja como su representante legal, sea citado a su Despacho Judicial y se le ponga de presente el documento para tal fin o que se le remita a la sede de la Entidad, a mi costa, para que reconozca su contenido, me permito entonces solicitar la práctica de esta prueba sobre el siguiente documento:

1. **Respuesta al Derecho de Petición** formulado al Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Valle, suscrito por **JORGE ENRIQUE PAREDES ALVARADO**, Capitán de dicha Institución, dirigido al Señor **GERARDO PEREIRA**, padre del occiso, de fecha Diciembre 02 de 2.013, el cual a pesar de haberse aportado en documento original al proceso mediante la prueba documental identificada con el literal “n”, debe ser ratificada por tratarse de un documento privado no autentico.

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

2. **Censo consolidado de la emergencia** del municipio de San Pedro (V)., hechos del 16 de Octubre de 2.012, expedido por la Personería Municipal de San Pedro (V), y aportado en documento copia, con fecha de elaboración Octubre 18 de 2.012, con el literal “u” de las pruebas documentales.

**APORTE DE DOCUMENTO EN PODER DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL:**

Tomando en cuenta que la Entidad demandada **LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL**, hasta la fecha de presentación de esta acción, no se ha dignado contestar el **Derecho de Petición** del señor demandante **GERARDO PEREIRA**, padre del fallecido **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN** en los hechos del 16 de octubre de 2012, dirigido al Comando de la Policía de San Pedro, Valle, cuya copia con firma original de recibido se aportó según consta en el literal “q”, solicito se oficie a dicha Institución con sede en el Municipio de San Pedro, V., para que con destino al proceso proceda a aportar la respectiva respuesta, so pena de tenerse por ciertos los hechos objeto de Derecho de Petición.

**PRUEBAS TESTIMONIALES:**

Comendidamente solicito la declaración testimonial de las siguientes personas, a fin que bajo la gravedad del juramento, declaren lo que les conste respecto al conocimiento que tuvieron o tienen de los hechos, convivencia y relación familiar de los parientes y familiares del fallecido **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**.

- A. Son testigos de los hechos** y de la actividad productiva del fallecido, los señores: **CARLOS ANDRES PEREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.114.058.223 de San Pedro (V); **FABIO HERNANDEZ ROMAN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.463.408; **SANDRA MILENA TOBON SALAZAR**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.785.786 de San Pedro (V); y **JOSE JAIR OROZCO PELAEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.445.553 de San Pedro (V)., quienes pueden Ser citados en la sede de la Personería Municipal de San Pedro (V)., ubicada en el Edificio de la Alcaldía Municipal del citado Municipio.
- B. Son testigos de la convivencia** entre el fallecido **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN** y la señora **YESICA MARIA CORTES LEAL** y de la actividad productiva del fallecido, los señores: **JACKELINE TOBON SALAZAR**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.962.820 de Tuluá (V); y el Dr. **AGOBARDO TASCON MENDOZA**, quien se desempeña actualmente como Personero Municipal de San Pedro (V), y pueden ser citados en la sede de la Personería Municipal de San Pedro (V), ubicada en el Edificio de la Alcaldía Municipal de dicho Municipio.
- C. Son testigos de la relación familiar** entre los señores **GERARDO PEREIRA**, (padre del fallecido) y los señores **GERARDO, WILMER, MARISOL PEREIRA PULGARIN**, (hermanos del fallecido) y **DANIEL PULGARIN PULGARIN**, (tío del

*Henry Escobar Holguín*

*Abogado Titulado*

fallecido) con **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, y de la actividad productiva de este (fallecido), los señores: **ANDRES AVILAR**, residente en la Calle 25 No. 6AW-23 del municipio de Tuluá (V); **FERNANDO HENAO**, residente en la Carrera 7 Oeste No. 25 – 16 del municipio de Tuluá (V), y **ROGELIO GÓMEZ**, residente en la Carrera 7 Oeste No. 25 – 22 del municipio de Tuluá (V).

## **INSPECCION JUDICIAL AL LUGAR DE LOS HECHOS:**

- A. Respetuosamente solicito se fije fecha y hora para llevar a cabo **INSPECCION JUDICIAL** en zona semi-rural de El Municipio de San Pedro (V), más concretamente en el lugar donde ocurrió el atentado terrorista a la infraestructura energética y petrolera, zona semi-rural ubicada en las afueras del citado Municipio, aledaña a la Quebrada denominada “La Artieta; diligencia que pido se realice inclusive a lo largo y ancho de la quebrada “La Artieta” hasta el corregimiento de Guayabal, para constatar los daños que se presentaron a la fauna, la flora, y al medio ambiente, así mismo los daños materiales causados en la zona.

Es de advertir que por carecer de nomenclatura el lugar donde se perpetró el atentado terrorista que originó el fallecimiento del joven **ANDRES MAURICIO PEREIRA PULGARIN**, me es imposible aportar imposible aportar una dirección de ubicación, pero el día de la practica de la diligencia, transportaré a la autoridad competente que la practicará, hasta dicho sitio.

## **ANEXOS**

1. Me permito anexar los **PODERES ORIGINALES** otorgados por cada uno de los siguientes demandantes, así: **GERARDO PEREIRA, GERARDO PEREIRA PULGARIN, DANIEL PULGARIN PULGARIN, MARISOL PEREIRA PULGARIN, WILMER PEREIRA PULGARIN.**
2. **LOS DOCUMENTOS** relacionados en el acápite de las pruebas.
3. **ACTA DE NO CONCILIACION PREJUDICIAL**, según diligencia llevada a cabo en la Procuraduría 60 Administrativa Judicial I, el día 01 de diciembre de 2014.

Constancia que da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, expedida por la Procuraduría 60 Judicial I, para asuntos administrativos, el día 05 de Diciembre de 2.014.

## **NOTIFICACIONES**

El suscrito APODERADO JUDICIAL y los DEMANDANTES, recibirán notificaciones en la Calle 24 No. 25 – 17 Barrio Centro del municipio de Tuluá (Valle).

Las instituciones demandadas, recibirán notificaciones así: **LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL – LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL; LA NACION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -**

*Calle 24 No. 25 - 17*

*Teléfono 2257676 Cel. 3156587856*

*Tuluá - Valle*

*Henry Escobar Holguín*  
*Abogado Titulado*

**EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL S.A.; EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA S.A. E.S.P.**, representadas legalmente por el señor Ministro, Gerente o por quien haga las veces, en la forma establecida por el artículo 159 del Código Contencioso Administrativo, luego de la modificación que le introdujera la Ley 446 de 1998.

Atentamente,

---

**HENRY ESCOBAR HOLGUIN**  
**C.C. No. 16.353.565 Tuluá (V)**  
**T.P. No. 61.005 C.S.Judicatura**